

Acta Sesión 25°

Comisión de Expertos para la Regulación de Aranceles

En Santiago de Chile, a 5 de diciembre de 2019, en dependencias del Ministerio de Educación ubicadas en calle Teatinos 20, segundo piso, se realizó la sesión N° 25 de la Comisión de Expertos para la Regulación de Aranceles, con la asistencia de los siguientes miembros:

Doña Geraldine González Santibáñez, quien preside la reunión, junto a don Carlos Christian Bate Trippel, don Tomás Flores Jaña, don Alfonso Muga Naredo, don José Miguel Salazar Zegers y don Marcelo Villena Chamorro. Excusó su asistencia don Agustín de la Cuesta Whittle.

Siendo las 15.00 hrs. se da inicio a la reunión:

1. Cuenta de la Presidente

Informa, en primer lugar, que desde la Subsecretaría la han expresado que está aún pendiente la determinación del marco presupuestario 2020 de la Comisión, información que había sido previamente solicitada de acuerdo a lo acordado por los comisionados con el fin de poder desarrollar una planificación de la labor del próximo año.

Por otro lado, agrega que se le ha solicitado que la Comisión reciba el martes 10 de diciembre a los integrantes del equipo que está participando en la elaboración de la primera propuesta de bases técnicas. La presentación que tienen previsto se enfocará en modificaciones a aspectos metodológicos contenidos en el documento enviado con fecha 8 de noviembre.

2. Continuación de la revisión de documento de primeras bases técnicas recibido el día 8 de noviembre desde la Subsecretaría de Educación Superior

En relación al contenido del citado documento, los comisionados intercambian puntos de vista y manifiestan observaciones en consenso a los aspectos que, a su juicio, son más relevantes y requieren especial atención:

- Información sobre costos recibida por instituciones de educación superior.

Se identifican diversos aspectos relativos a la información enviada por las instituciones de educación superior en relación a sus respectivos costos que es necesario aclarar y mejorar,

en particular, en lo relativo a una desagregación más profunda de aquellos que serán considerados, así como el alcance de algunas categorías incorporadas.

Se enfatiza la relevancia de esta información en atención a que el modelo propuesto por la norma legal descansa en una adecuada identificación de los costos. Por ello, estas observaciones debieran considerarse para el próximo levantamiento de información planificado por la Subsecretaría, el que tendrá lugar en los próximos meses.

- Definición de grupos de carreras.

Se aprecia una inconsistencia en la materia, pues la opción propuesta no permita garantizar un mínimo de datos para desarrollar una curva de distribución de costos suficientemente robusta al existir grupos de tamaño muy reducido, lo cual tiene un impacto relevante distorsionando el valor de los respectivos aranceles.

Se considera necesario que el criterio de agrupación elegido se haga cargo de esta condición, así como del desafío de aquellos casos, particularmente asociados a la educación técnico profesional, en que los datos provienen de un número reducido de instituciones, donde en algunos casos una gran proporción de ellos provienen de una institución.

- Establecimiento del percentil 25 para determinación de costos.

La incorporación expresa del percentil 25 de la curva de distribución de costos como aquel que expresa el costo razonable y necesario para impartir una carrera genera dudas en los comisionados, pues no se aprecia una justificación adecuada del mismo así como de la necesidad de señalarlo expresamente en la fórmula de cálculo respectivo.

- Definición de costos razonables.

Debe precisarse cuál será el alcance y contenido de los mismos, debiendo incorporarse los costos medios históricos del sector y los costos regulatorios esperados, así como definirse el mecanismo a través del cual se construirá la curva de costos y el mecanismo para eliminar los outliers.

- Pertinencia de la incorporación del concepto de carrera superavitaria.

Se discute la procedencia de incorporar este concepto en el contexto del marco legal existente, el cual se funda en costos. En efecto, el modelo normativo contenido en la ley 21.091 no lo considera ni siquiera en forma progresiva.

Los comisionados sostienen que, incluso asumiendo se generasen desbalances relativos a financiamiento a propósito de la aplicación de la metodología, existen otros mecanismos más adecuados para hacerse cargo del tema.

- Metodología de cálculo.

Debe ser explicitada en forma clara, diferenciando en forma expresa las modalidades aplicables a las 3 categorías establecidas en la normativa, vale decir, los aranceles, los derechos básicos de matrícula y los costos de titulación.

- Ponderadores.


Se considera de alta relevancia revisar los ponderadores propuestos e incorporar modificaciones a los mismos de manera de dotarlos de un adecuado nivel de incidencia. Asimismo, se considera apropiado evaluar nuevos ponderadores que permitan incorporar otros aspectos no considerados en la propuesta.

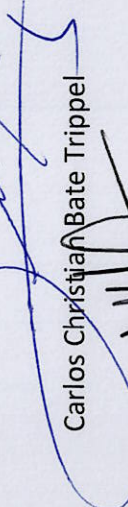
Se acuerda que el Comisionado Bate redacte un documento que sistematice las observaciones planteadas.

Por su parte el Comisionado Salazar queda a cargo del análisis de los aspectos relativos a los ponderadores utilizados.

Sin otros temas que discutir, se pone término a la reunión siendo las 18.00 horas.


A continuación, firman:

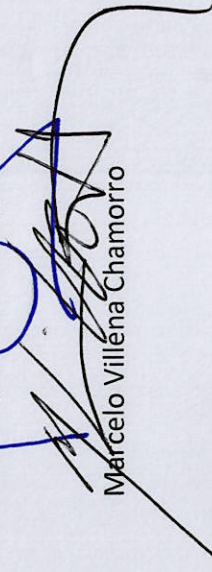

Geraldine González Santibañez
Presidente


Carlos Christian Bate Trippel


Tomás Florio Jaña


Alfonso Muga Naredo


Jose Miguel Salazar Zegers


Marcelo Villena Chamorro